

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



JUZGADO VEINTIOCHO CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá, D.C., veintiocho de julio de dos mil veinticinco

Radicación: 28 2022 00122 00
Proceso: Acción Popular
Demandante: 100% Legal Liga de Consumidores
Demandado: Banco Av Villas S.A
Providencia: Sentencia

El juzgado procede a resolver la acción popular incoada por 100% Legal Liga de Consumidores en contra de Banco AV Villas S.A, en el cual se convocó a la Procuraduría General del la Nación – Delegada en Asuntos Civiles y la Superintendencia Financiera de Colombia.

ANTECEDENTES

1. La accionante impetró Acción Popular, pretendiendo
 - (i) Se declare que la cláusula vigésima primera del contrato marco de productos-persona jurídica que emplea para la apertura de productos de sus clientes, es una práctica abusiva por parte de la entidad bancaria, pues vulnera el derecho colectivo del consumidor y lo establecido en el literal n del art. 4 de la Ley 472 de 1998;
 - (ii) Ordenar y obligar a la demandada a abstenerse de dicha práctica abusiva, pues es una conducta que va en contra del estándar de conductas profesionales que se le exige a las entidades bancarias para con sus clientes o consumidores;
 - (iii) Declarar civil y contractualmente responsable a la demandada por el daño ocasionado a sus clientes en la ciudad de Bogotá, por los sobregiros que ha generado y los débitos que ha efectuado a las cuentas corrientes de sus clientes o consumidores de su producto financiero cuenta corriente;
 - (iv) Condenar a la accionada a regresar los valores que ha generado por concepto de sobregiros a las cuentas corrientes de sus clientes o consumidores en la ciudad de Bogotá y que no correspondan al pago de cheques en descubierto;
 - (v) Ordenar que la demandada rectifique los reportes negativos que se hayan efectuado y registrado ante centrales de información de todos sus clientes o consumidores cuenta correntistas en la ciudad de Bogotá;

- (vi) Disponer el retiro de la cláusula vigésima primera del contrato marco de productos-persona jurídica que utiliza la demandada para la apertura de productos a sus clientes;
- (vii) Condenar a la demandada el pago de las costas y multas de conformidad con lo previsto en la Ley 472 de 1998;
- (viii) Condenar a la demandada a indemnizar a todos y cada uno de los gastos en que incurra la actora para el ejercicio y/o actividad desplegada en la referida demanda

2. Como fundamento de sus pretensiones, manifestó que al realizar una revisión de los clausulados de los principales productos que el Banco Av. Villas S.A. ofrece a sus clientes o usuarios, se encontró que existen cláusulas abusivas que resultan contrarias al ordenamiento jurídico aplicable, como lo es la cláusula vigésima primera del documento denominado contrato marco de productos-persona jurídica, cláusula que afecta la relación entre la entidad bancaria y sus clientes en la ciudad de Bogotá

3. Refirió que la cláusula vigésima primera del contrato citado, resulta contraria a lo dispuesto en el art. 125 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en el numeral 6.2.20 de la Circular Externa No. 29 del 3 de octubre de 2011, por lo que es una práctica abusiva que va en contra del estándar de la conducta profesional que se les exige a las entidades bancarias para con sus clientes.

LA ACTUACIÓN PROCESAL

1. Admitida la acción popular promovida, se ordenó notificar a la parte demandada, emplazar a los miembros de la comunidad, entre otros. Asimismo, se dio curso a la reforma a la demanda mediante auto del 14 de octubre de 2022.

2. La demandada se notificó por conducta concluyente y dio contestación a la demanda, en la cual se opusó a las pretensiones y formuló las excepciones denominadas:

- La cláusula vigésima primera del contrato marco de productos-persona jurídica no impone costos por comisiones bancarias como las cuotas de manejo de la tarjeta débito, copia de extractos, usos de cheques de gerencia, transferencias y usos de cajeros automáticos como erróneamente lo manifiesta la accionante.
- La cláusula no vulnera derechos colectivos, y el accionante tampoco refiere en que consiste la infracción.
- La cláusula no vulnera derechos de consumidor financiero.
- La cláusula no es una abusiva.

- La cláusula no debe ser retirada, pues cumple las disposiciones normativas y legales.
 - La Superintendencia Financiera no ha presentado reparo respecto de lo dispuesto en la cláusula vigésima primera del contrato marco de productos-persona jurídica.
 - La cláusula no es contraria a la buena fe.
 - No está obligado a pagar ningún tipo de indemnización, gastos o costas en cabeza de la accionante, ya que dentro del plenario no se encuentran acreditados.
 - Temeridad y mala fe de la accionante.
 - Pleito pendiente.
4. Durante la audiencia de pacto de cumplimiento, las partes no llegaron a ningún acuerdo, por lo que se dispuso a decretar pruebas, y se les concedió el término de cinco (5) días para alegar de conclusión.
5. Durante el trámite, la Procuraduría General de la Nación, a través del procurador judicial II designado, refirió que la accionante no planteó un concepto de violación, ya que no mencionó cuáles son las razones por las cuales la cláusula vigésima primera del contrato marco de productos - persona jurídica, luce abusiva en los términos de la Ley 1328 de 2009.
6. La Superintendencia Financiera de Colombia indicó que no encuentra que la cláusula vigésima primera del contrato marco de productos del Banco Av. Villas S.A. sea vulneradora de los derechos fundamentales de los consumidores financieros, pues el débito de los fondos disponibles en la cuenta corriente para el pago de cheques extraviados, hurtados o destruidos, no opera de manera automática, sino previo cumplimiento de los requisitos en ella contenida y otorga al cliente la posibilidad de dar orden de no pago.
7. El Banco Av. Villas S.A. presentó sus alegatos de conclusión, señalando como fundamento de todas las excepciones formuladas que la cláusula vigésima primera del contrato marco de productos – persona jurídica, no impone costos o cargos por los conceptos indicados erróneamente por la parte accionante.

Aunado a lo anterior, refirió que atendiendo al artículo 1382 del Código de Comercio, el Banco girador podrá debitar fondos disponibles de su cuenta corriente hasta por una cuantía equivalente al importe total o parcial de los cheques girados por el cuentacorrentista, a pesar que los cheques hayan sido extraviados, hurtados y/o destruidos en manos del banco consignatario.

En otras palabras, si por alguna razón, una vez consignado un cheque en un banco depositario o girado en ese banco el cheque se extravía, se hurta y/o se destruye, el cheque deberá ser pagado por el Banco, lo que hace que la transacción del cuentacorrentista no se anule y por lo tanto siga su curso, en

beneficio no solo de ese girador, sino además del beneficiario del cheque, y por lo tanto las operaciones entre ellos no se trunquen.

Finalmente, refirió que no se describió con claridad la puesta en riesgo y vulneración de los derechos e intereses colectivos que se han afectado, ni se relacionaron concretamente cuál es el daño aparente, la vulneración de derechos colectivos, o que dicha afectación tenga relación directa con la cláusula aludida.

CONSIDERACIONES

1. En primer lugar, se verifica que concurren los presupuestos procesales, y no se presentan circunstancias que encajen en las causales de nulidad previstas en la legislación adjetiva.

2. Resulta relevante señalar que las acciones populares fueron inicialmente previstas en el art. 1005 del C. Civil, y son hoy, al igual que la acción de tutela, un mecanismo o instrumento jurídico de naturaleza constitucional, instituida de manera específica para la efectiva protección de los derechos de los asociados.

3. La Constitución Política de 1991 en su artículo 88, al efecto señala que las acciones populares están orientadas a la protección idónea de derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica, y otros de similar naturaleza, así como la protección por los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las acciones que cada una de ellas pueda ejercer.

4. Ahora bien, el artículo 4 de La Ley 472 de 1998 define los derechos e intereses colectivos susceptibles de ser amparados por vía de acción popular, entre los que se encuentran, los derechos de los consumidores y usuarios (literal n).

5. La clasificación que la Ley 472 de 1998 hace de los derechos e intereses colectivos susceptibles de ser reclamados mediante acciones populares, no la restringe a los que allí se enuncian, sino que la misma norma dispone que, además de los que se enumeran en ese estatuto, son derechos e intereses colectivos, los definidos como tales en la Constitución, las leyes ordinarias y los tratados de Derecho Internacional celebrados por Colombia. De igual manera, señala que los derechos e intereses de ese rango enunciados en el art. 4 de la ley en mención, estarán definidos y regulados por las normas actualmente vigentes o las que se expidan con posterioridad a la entrada en vigor de la mencionada Ley.

6. Al respecto establece la Ley 1480 de 2011, por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones, que:

“Artículo 42. Concepto y prohibición. Son cláusulas abusivas aquellas que producen un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor

y las que, en las mismas condiciones, afecten el tiempo, modo o lugar en que el consumidor puede ejercer sus derechos. Para establecer la naturaleza y magnitud del desequilibrio, serán relevantes todas las condiciones particulares de la transacción particular que se analiza. Los productores y proveedores no podrán incluir cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores. En caso de ser incluidas serán ineficaces de pleno derecho”.

“Artículo 43. Cláusulas abusivas ineficaces de pleno derecho. Son ineficaces de pleno derecho las cláusulas que:

- 1. Limiten la responsabilidad del productor o proveedor de las obligaciones que por ley les corresponden;*
- 2. Impliquen renuncia de los derechos del consumidor que por ley les corresponden;*
- 3. Inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor;*
- 4. Trasladen al consumidor o un tercero que no sea parte del contrato la responsabilidad del productor o proveedor;*
- 5. Establezcan que el productor o proveedor no reintegre lo pagado si no se ejecuta en todo o en parte el objeto contratado;*
- 6. Vinculen al consumidor al contrato, aun cuando el productor o proveedor no cumpla sus obligaciones;*
- 7. Concedan al productor o proveedor la facultad de determinar unilateralmente si el objeto y la ejecución del contrato se ajusta a lo estipulado en el mismo;*
- 8. Impidan al consumidor resolver el contrato en caso que resulte procedente excepcionar el incumplimiento del productor o proveedor, salvo en el caso del arrendamiento financiero;*
- 9. Presuman cualquier manifestación de voluntad del consumidor, cuando de esta se deriven erogaciones u obligaciones a su cargo;*
- 10. Incluyan el pago de intereses no autorizados legalmente, sin perjuicio de la eventual responsabilidad penal.*
- 11. Para la terminación del contrato impongan al consumidor mayores requisitos a los solicitados al momento de la celebración del mismo, o que impongan mayores cargas a las legalmente establecidas cuando estas existan;*
- 12. Obliguen al consumidor a acudir a la justicia arbitral.*
- 13. Restrinjan o eliminen la facultad del usuario del bien para hacer efectivas directamente ante el productor y/o proveedor las garantías a que hace referencia la presente ley, en los contratos de arrendamiento financiero y arrendamiento de bienes muebles.*
- 14. Cláusulas de renovación automática que impidan al consumidor dar por terminado el contrato en cualquier momento o que imponga sanciones por la terminación anticipada, a excepción de lo contemplado en el artículo 41 de la presente ley”.*

7. Por su parte, la Ley 1328 de 2009, por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones, establece que:

“ARTÍCULO 11. PROHIBICIÓN DE UTILIZACIÓN DE CLÁUSULAS ABUSIVAS EN CONTRATOS. Se prohíbe las cláusulas o

estipulaciones contractuales que se incorporen en los contratos de adhesión que:

- a) Prevean o impliquen limitación o renuncia al ejercicio de los derechos de los consumidores financieros.*
- b) Inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor financiero.*
- c) Incluyan espacios en blanco, siempre que su diligenciamiento no esté autorizado detalladamente en una carta de instrucciones.*
- d) Cualquiera otra que limite los derechos de los consumidores financieros y deberes de las entidades vigiladas derivados del contrato, o exonere, atenúe o limite la responsabilidad de dichas entidades, y que puedan ocasionar perjuicios al consumidor financiero.*
- e) Las demás que establezca de manera previa y general la Superintendencia Financiera de Colombia.*

PARÁGRAFO. Cualquier estipulación o utilización de cláusulas abusivas en un contrato se entenderá por no escrita o sin efectos para el consumidor financiero.

ARTÍCULO 12. PRÁCTICAS ABUSIVAS. *Se consideran prácticas abusivas por parte de las entidades vigiladas las siguientes:*

- a) El condicionamiento al consumidor financiero por parte de la entidad vigilada de que este acceda a la adquisición de uno o más productos o servicios que presta directamente o por medio de otras instituciones vigiladas a través de su red de oficinas, o realice inversiones o similares, para el otorgamiento de otro u otros de sus productos y servicios, y que no son necesarias para su natural prestación.*
- b) El iniciar o renovar un servicio sin solicitud o autorización expresa del consumidor.*
- c) La inversión de la carga de la prueba en caso de fraudes en contra de consumidor financiero.*
- d) Las demás que establezca de manera previa y general la Superintendencia Financiera de Colombia.*

PARÁGRAFO. Las prácticas abusivas están prohibidas a partir de la entrada en vigencia de la presente norma y serán sancionables conforme lo dispone la Superintendencia Financiera de Colombia y la ley”.

Problema Jurídico y caso en concreto.

8. Señalado lo anterior, y teniendo en cuenta lo indicando en el escrito de demanda, corresponde al Despacho establecer si la cláusula cláusula vigésima primera del contrato marco de productos-persona jurídica que emplea la convocada para la apertura de productos de sus clientes, vulnera los derechos del consumidor consagrados en el literal n) del art. 4 de la Ley 472 de 1998 y en las Leyes 1328 de 2009 y 1480 de 2011.

9. Del escrito de demanda, se tiene que la parte actora refiere como derecho colectivo vulnerado, el de los consumidores y usuarios, pues estima que tales se ven sometidos al cobro de costos o comisiones aplicadas por las

instituciones financieras, que resultan ser excesivos, y se encuentran presentes en los contratos de adhesión.

Ello en la medida en que la convocada ejerce prácticas abusivas, pues mediante la cláusula controvertida, se permite realizar débitos de la cuenta corriente existiendo dineros depositados en la misma, tendientes a cubrir las situaciones allí previstas, entre ellas, los errores o correcciones, excediéndose lo contemplado y autorizado por las normas que regulan la materia, al respecto del sobregiro en cuentas corrientes por causa distinta al pago de cheques en descubierto.

10. En primer lugar, se analizará la excepción denominada *“la cláusula vigésima primera del contrato marco de productos-persona jurídica no impone costos por comisiones bancarias como las cuotas de manejo de la tarjeta débito, copia de extractos, usos de cheques de gerencia, transferencias y usos de cajeros automáticos como erróneamente lo manifiesta la accionante”*.

11. Efectuada la lectura de la cláusula controvertida, se puede extractar que en la misma los siguientes aspectos:

i) El cliente es informado por el Banco sobre los costos y tarifas causadas en el evento en que los cheques hayan sido extraviados, hurtados o destruidos en poder de un banco consignatario y otra entidad legalmente autorizada para recibir cheques en consignación siempre y cuando la solicitud de la entidad consignataria cumpla con los requisitos y documentos requeridos;

ii) Se señala que el banco asumirá el pago de documentos hasta por una cuantía que no exceda los ciento once (111) smlmv a la fecha en que haya ocurrido el suceso, y en caso que la cuantía sea superior, quedará a juicio del banco acogerse al procedimiento plasmado en la cláusula; y

iii) El cliente se obliga a dar orden de no pago del cheque extraviado, hurtado o destruido en poder del banco consignatario, una vez se hubiere dispuesto de los fondos disponibles en su cuenta corriente, a solicitud del banco.

12. Así las cosas, se tiene que los dos primeros aspectos se ajustan a derecho, toda vez que el art. 2.35.4.1.1. del Decreto 2555 del 15 de julio de 2010¹ dispone que:

“Para la fijación, difusión y publicidad de las tarifas o precios, diferentes a las tasas de interés, que las instituciones financieras cobran por los servicios y productos regidos por contratos de adhesión, que ofrecen a los consumidores financieros, deberán observarse los siguientes principios:

a) Libertad: Las instituciones financieras tienen libertad para fijar, de manera autónoma e individual, los precios y tarifas correspondientes a

¹ Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones”

los productos y servicios que ofrezcan, observando para ello las disposiciones contenidas en el presente Título, así como las demás disposiciones legales y constitucionales aplicables (...).

c) Transparencia e información cierta, suficiente y oportuna: Las tarifas y los precios correspondientes a los productos y servicios ofrecidos por las instituciones financieras deben ser suministrados a los consumidores financieros de manera cierta, suficiente, clara y anticipada, de tal forma que se permita que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y, especialmente, el precio total que pagarán por los servicios ofrecidos, según los supuestos de uso pactados.

d) Correspondencia: Todos los cobros que realice una entidad financiera deberán corresponder a la prestación efectiva de un servicio y este no podrá ser cobrado en más de una ocasión (...)." (subrayado fuera del texto original)

13. Así, los mencionados aspectos contenidos en la cláusula objeto de debate, son legales pues lo que reflejan es que el Banco accionado pone a disposición del cliente la publicidad e información sobre las características propias del producto ofrecido, con el fin de permitir y facilitar su comparación y comprensión frente a los productos del mismo tipo que son ofrecidos en el mercado; así que el usuario recibió una adecuada educación respecto de los costos que se generan por la prestación de dicho servicio bancario², garantizando los derechos del consumidor financiero consagrados en los literales b) y d) del art. 5 de la Ley 1328 de 2009.

14. De igual manera es menester resaltar que las entidades financieras están facultadas para fijar y ejercer el cobro de las tarifas que se generen por la prestación de los servicios y productos cobijados por contratos de adhesión, desde luego, siempre y cuando cumplan los principios establecidos por la ley para el efecto.

15. No obstante lo anterior, si bien es cierto la parte actora refiere que el derecho vulnerado es consecuencia de la realización de cobros desproporcionados y no justificados, como los contenidos en la cláusula objeto de debate, es necesario resaltar lo señalado por el Banco Av. Villas, en relación con que mediante la citada cláusula se busca dar cumplimiento a los acuerdos interbancarios para el canje y cobro de cheques entre bancos del sistema financiero colombiano, lo que genera un beneficio para el cuentacorrentista y para los beneficiarios de los cheques.

Ello pues, si por alguna razón, una vez consignado un cheque en un banco depositario o girado en ese banco el cheque se extravía, se hurta y/o se destruye, éste deberá ser pagado por el Banco Av. Villas S.A., lo que hace que la transacción no se anule y por lo tanto siga su curso, en beneficio no

² Ley 1328 de 2009. Art. 2°. Lit. "f) Educación para el consumidor financiero. Las entidades vigiladas, las asociaciones gremiales, las asociaciones de consumidores, las instituciones públicas que realizan la intervención y supervisión en el sector financiero, así como los organismos de autorregulación, procurarán una adecuada educación de los consumidores financieros respecto de los productos y servicios financieros que ofrecen las entidades vigiladas, de la naturaleza de los mercados en los que actúan, de las instituciones autorizadas para prestarlos, así como de los diferentes mecanismos establecidos para la defensa de sus derechos".

solo de ese girador, sino además del beneficiario del cheque, ocasionando que las operaciones económicas entre ellos no se trunquen.

16. De esta manera, señala que los requisitos deben ser cumplidos por el banco depositario o consignatario, y no por el cuentacorrentista o el beneficiario del cheque, ni se les obliga a asumir algún tipo de costo, pues son requisitos que se tienen en los convenios interbancarios.

17. Por lo anterior, contrario a lo indicado por la parte actora, no se evidencia que se genere un cobro por concepto de costo o comisión bancaria a los clientes de la entidad financiera, sino que se establecen condiciones para las operaciones interbancarias, estableciendo los respectivos montos sobre los cuales el banco realizará el pago señalado, indicándose que en caso de superarse el referido monto, será el banco el que determine si se sujeta o no al procedimiento previsto.

18. A lo anterior se suma que el Banco accionado cumple con las obligaciones que le imponen los literales f) y g) del art. 7 de la misma Ley 1328 de 2009, consistentes en elaborar los contratos y anexos que regulan las relaciones con sus clientes, con claridad, en caracteres legibles a simple vista, ponerlos a su disposición para su aceptación; y abstenerse de hacer cobros no pactados o no informados previamente al consumidor financiero.

19. Entonces, lo que puede verse en el presente caso, es que el consumidor financiero que adquiere un servicio con el Banco Av. Villas, está siendo informado del trámite a seguir en caso de extravío, hurto o destrucción del cheque, acto que no puede catalogarse como contrario a la normatividad.

20. Son suficientes las anteriores razones para establecer que la cláusula vigésima primera del contrato marco de productos-persona jurídica, no resulta contraria a las directrices legales concebidas sobre el particular, pues tal como se pudo analizar, cumple con los principios establecidos por la Ley 1328 de 2009 para la protección de los derechos del consumidor financiero.

Menos aún vulnera los derechos del consumidor señalados en el art. 3 de la Ley 1480 de 2011, pues garantiza al usuario financiero el derecho a recibir información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto del producto adquirido, así como sobre los riesgos que corre por el consumo y utilización (art. 3°, num. 1.3).

21. Ello, aunado a que, no comporta una cláusula o práctica abusiva conforme disponen los artículos 11 y 12 de la Ley 1328 de 2009, pues no prevé la limitación o renuncia al ejercicio de los derechos del consumidor financiero que adquiere productos, ni contiene manifestaciones que exoneren, atenúen o limiten la responsabilidad y el cumplimiento de los deberes del Banco accionado derivados del contrato, que puedan ocasionar perjuicios al usuario; ni de acuerdo a los preceptos 42 y 43 de la Ley 1480 de 2011, porque no se acredita en el plenario que produzca un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor, ni afecta el tiempo, modo o lugar en que el consumidor pueda ejercer sus derechos.

22. En este punto es necesario resaltar, que tampoco resulta abusiva la cláusula si se revisa bajo los lineamientos del artículo 125 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero³ y de la Circular Externa No. 029 de 3 de octubre de 2014, de una parte, porque dichas normas no regulan las situaciones consideradas en la cláusula objeto de impugnación, y de otra, porque deja de lado la parte actora que dicha cláusula no sólo debe analizarse conforme a las normas especiales que rigen al contrato sino, de manera sistemática, junto con los preceptos que regulan la actividad financiera en general.

23. Ahora bien, respecto a la manifestación de la parte accionante relativa a que la cláusula corresponde a un contrato de adhesión que impone los términos y condiciones en que se llevará a cabo la prestación del servicio, sin que el consumidor financiero tenga otra alternativa diferente a aceptarlo o rechazarlo, marcando un evidente desequilibrio frente a los intereses de cada parte en la negociación, puede decirse que si bien es cierto este tipo de contratos es elaborado unilateralmente por la entidad bancaria y sus cláusulas no pueden ser discutidas libre y previamente por el cliente⁴, también resulta cierto que el Banco tiene la obligación de informar de manera clara y transparente las condiciones, costos y demás aspectos del producto brindado, y que es al usuario a quien le corresponde compararlo con otros similares existentes en el mercado, elegir, y manifestar libremente su consentimiento en señal de aceptación.

24. Este derecho de información ha sido resaltado incluso por la Corte Constitucional de la siguiente manera⁵:

“El acceso completo, veraz y oportuno a la información -que es una condición elemental, inherente a toda actividad de consumo- adquiere especial trascendencia en el marco del sistema financiero, en razón a los contratos de adhesión que suelen ofrecer las entidades vigiladas en el mercado, a la complejidad de los términos contractuales que se manejan y al estado de indefensión en que se encuentran los usuarios. Siendo así, la información es una de las herramientas clave para empoderar al ciudadano en su ejercicio contractual, tanto antes de la celebración de un contrato, como durante su ejecución y aún después de la terminación del mismo, con el fin de precaver que la libertad contractual se emplee abusivamente en detrimento de otros derechos fundamentales. Es por ello que cualquier restricción injustificada al acceso a la información debe entenderse como una práctica abusiva, propiciada por el poder dominante del que gozan las entidades aseguradoras y bancarias”.

25. Luego entonces, no puede decirse que sea vulnerador de los derechos del consumidor la imposición de dicha cláusula, ni que sea una muestra del ejercicio dominante de las entidades bancarias, pues contrario a lo considerado por la accionante, lo que busca es permitir al cliente realizar una adecuada comparación de las condiciones con las ofrecidas por el mercado,

³ Art. 125. “...Cuando el banco pague cheques por valor superior al saldo de la cuenta corriente, el excedente será exigible a partir del día siguiente al otorgamiento del descubierto, salvo pacto en contrario. El crédito as

⁴ Ley 1328 de 2009. Art. 2° definiciones. Literal f).

⁵ Corte Constitucional. Sentencia T-136 de 2013.

y realizar una escogencia una vez esté debidamente informado, en desarrollo de la voluntad contractual de las partes.

26. Así, no existe otra vía que desestimar las pretensiones de la acción popular formuladas, pues la parte actora no acreditó ni siquiera de manera sumaria que los clientes del Banco Av. Villas no tengan la oportunidad de conocer el valor de los costos mencionados en la cláusula atacada, o incluso que se incurra en el cobro de costos, intereses, saldos negativos o comisiones bancarias, pues como ya se señaló, en la cláusula controvertida se hace referencia al procedimiento a seguir en el caso de hurto, extravío o destrucción de un cheque y los costos interbancarios; contrario a ello, es el banco el que asume el pago del costo interbancario en los eventos señalados, del cheque que se encuentre en poder de un banco consignatario.

27. Nótese, que al revisar en conjunto las pruebas documentales aportadas por la actora, no pueden inferirse elementos de juicio que permitan concluir la procedencia de una sentencia que ampare los derechos que según la accionante han sido vulnerados, pues, como se dijo, no se logró comprobar que el Banco accionado quebrante los derechos del consumidor consagrados en el literal n) del art. 4º de la Ley 472 de 1998 y en las Leyes 1328 de 2009 y 1480 de 2011.

28. Siendo del caso resaltar, que la finalidad de esta acción es determinar si el contenido de la Cláusula en controversia vulnera o no los derechos fundamentales de los consumidores financieros, de cara a la señalada normatividad, mas no auscultar en las consecuencias del desarrollo de la actividad comercial para cada una de las partes intervinientes, pues este corresponde a un aspecto ajeno al objeto de la presente acción constitucional.

29. Al respecto, ha sido tajante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, al determinar que⁶:

“Al Juez no le basta la mera enunciación de las partes para sentenciar la controversia, porque ello sería tanto como permitirles sacar beneficio del discurso persuasivo que presentan; por ende, la ley impone a cada extremo del litigio la tarea de traer al juicio de manera oportuna y conforme a las ritualidades del caso, los elementos probatorios destinados a verificar que los hechos alegados efectivamente sucedieron, o que son del modo como se presentaron, todo con miras a que se surta la consecuencia jurídica de las normas sustanciales que se invocan”.

30. Y es que en materia de Acciones Populares, el art. 30 de la Ley 472 de 1998 es claro en señalar que la carga de la prueba radica en cabeza del actor popular, es decir, el demandante es quien tiene el deber legal de acreditar en debida forma los hechos, acciones u omisiones de la accionada que considera vulneradores del derecho colectivo invocado, postulado relevante para el presente asunto, máxime si fue la misma Corte Constitucional⁷ la que

⁶ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 25 de mayo de 2010, dentro del Expediente 23001-31-10-002-1998-00467-01.

⁷ Corte Constitucional, Sentencia C-2015 de 1999.

explicó al momento de estudiar la exequibilidad del mencionado precepto normativo, que:

“(…) teniendo en cuenta la naturaleza de la acción popular, para la Corte resulta admisible, lógico y necesario que la demostración de los perjuicios sufridos por una persona en uno de sus derechos e intereses colectivos, le corresponda al afectado. En todo caso, el debido proceso queda a salvo, pues el mismo precepto establece que si por razones económicas o técnicas el demandante no puede acreditar las pruebas, el juez deba impartir las órdenes necesarias para suplir la deficiencia probatoria, para lo cual puede solicitar a la entidad pública cuyo objeto esté referido al tema materia de debate, dichos experticios probatorios y así obtener los elementos indispensables para adoptar un fallo de mérito.

Además, el derecho fundamental a la presunción de inocencia consagrado en el artículo 29 superior es aplicable a todos los poderes públicos y a las personas en general, razón por la cual trasladar la carga de la prueba al demandado como lo pretende el actor, equivaldría a presumir desde un comienzo, con la sola presentación de la demanda, su responsabilidad”.

31. Con todo, refulge en el expediente que la regulación normativa aplicable a la materia está siendo atendida por el Banco accionado en lo que tiene que ver con la vigésima primera del contrato marco de productos-persona jurídica, y así la controversia planteada no se subsume dentro de la protección que pregonan el art. 2 de la Ley 472 de 1998⁸, pues, se itera, no se acreditó que con su imposición se hubiere causado un daño contingente, un peligro inminente, amenaza, vulneración o agravio a los derechos e intereses de la comunidad en general y/o usuarios financieros.

32. En ese sentido, se entiende **PROBADA LA EXCEPCIÓN** formulada, por lo que este despacho no entrará a disponer sobre las demás propuestas, pues con la misma, es procedente desestimar las pretensiones de la acción popular.

33. Finalmente se tiene que, a pesar de negarse las pretensiones de la demanda no procede la condena en costas a cargo de la parte actora, pues la frustración de la acción no implica de suyo la temeridad en su presentación, de manera que no concurre el presupuesto del artículo 38 de la ley 472 de 1998 para imponer costas en este tipo de acciones colectivas.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito De Bogotá D. C., administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

⁸ Art. 2° “Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”.

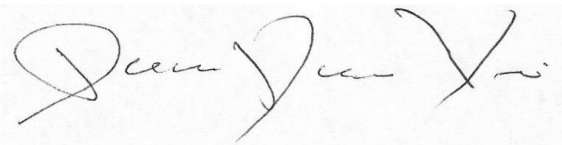
PRIMERO: **NEGAR** las pretensiones de la acción popular formulada por 100% Legal liga de Consumidores.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Declarar terminado el proceso.

CUARTO: Por Secretaría, una vez ejecutoriada la presente decisión, archívense las diligencias.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



NELSON ANDRÉS PÉREZ ORTIZ
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADO

La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No. 060 Hoy 29-07-2025



LUIS EDUARDO MORENO MOYANO
Secretario

JC